

Arturo Sosa A.

Notas coyunturales

Tiempo de transición

El troncado interinato de Octavio Lepage sirvió para bajar la tensión política y confirmar que se pueden encontrar salidas institucionales y sin conmoción social a las situaciones que se presentan. Se le percibió «con ganas» de disfrutar el poder presidencial, aunque tuvo que conformarse con algunas formalidades sin trascendencia. Tuvo una presencia excesiva en los medios de comunicación que se volvió en su contra pues se mostró incapaz de transmitir alguna concepción de su acción como gobernante, se le vio inseguro a la hora de proponer medidas precisas para resolver los problemas del corto o mediano plazo que parecía no manejar del todo. Si había alguna posibilidad de que fuese el Presidente Provisional por el resto del período, sus cortos días en Miraflores convencieron a todos de su incapacidad para el cargo en este momento. El propio Lepage indicó que «no le gustó ser Presidente», igual que el zorro de la fábula de Esopo decidió que las apetitosas uvas que no alcanzaba «estaban verdes».

El nombramiento de Ramón J. Velásquez, fruto de un vasto consenso nacional aceptado a regañadientes por los grandes partidos en el Congreso, cerró el capítulo de la Presidencia de Carlos Andrés Pérez y abrió al país la posibilidad de adelantar en el camino de la transición política hacia nuevos consensos sociales (ver el Editorial de este número de SIC). El nuevo Presidente tardó un par de semanas en completar su gabinete ministerial, abundante en andinos y cuya coherencia como equipo no hay que suponer *a priori*, aunque hay que reconocerle que la presencia de figuras como Allan R. Brewer-Carias, Pablo Pulido, Carlos Rafael Silva, Hernán Anzola, Hiram Gaviria... le dan una dimensión de seriedad y de estudio de las soluciones desde perspectivas complementarias. Un equipo así al menos nos saca del pensamiento unidimensional, incorpora el pluralismo y alienta la esperanza de que se escuche a diversos sectores de la sociedad.

Al mismo tiempo el Presidente Velásquez comenzó la puesta en práctica de su novedosa idea de los Consejos Consultivos. En las próximas semanas veremos hacia donde se orienta el actual gobierno. Si se limita a mantener la estabilidad política necesaria para llegar a las elecciones de diciembre y al cambio de guardia de febrero, «dándole una patada al mingo» de las decisiones de fondo para que sea el próximo Presidente el que intente el arrime; o si asume el carácter de gobierno de transición adelantando lo más posible el proceso de acuerdos sociales, rescate la legitimidad de la democracia y el papel dirigente de la Presidencia de la República. En este sentido, la relación que logre establecer en los

procesos de toma de decisiones con los candidatos presidenciales representativos de las tendencias más fuertes en la sociedad venezolana cobra una importancia singular. Si en las decisiones del gobierno de transición están comprometidos los candidatos y lo que ellos representan se estarán adelantando pasos hacia el fortalecimiento de la democracia.

PROFUNDIZAR LA POLITIZACION

En medio de la rapidez de los acontecimientos se nota una excesiva focalización del debate público en los detalles políticos del momento. Tanto los medios de comunicación como los comentarios en distintos círculos se interesan por donde se reunieron los Magistrados, quienes asistieron a la Cámara, sobre si calificar de temporal o definitiva la ausencia de Carlos Andrés Pérez, el brindis de Lepage en Miraflores o sobre si Ramón J. debe vivir en La Casona. Mientras tanto, el debate importante, es decir, la cuestión de hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad y qué tipo de Estado queremos no termina de echar raíces. Ni la dirigencia política ni los «formadores de opinión» proponen ideas o hacen planteamientos que lleven hacia allí la preocupación de los venezolanos.

En una situación así se percibe desorientación en el pueblo, especialmente en el interior del país. Desorientación producida por la notable incapacidad de los gobernantes y líderes políticos y sociales de transmitir una información completa sobre la real magnitud de los problemas que confronta el país y las alternativas de solución, de manera que exista la primera condición para provocar la participación política adulta. La ausencia de un liderazgo cultural, intelectual, económico y político con suficiente credibilidad para motivar y canalizar el proceso de generación de consensos sociales básicos, es otro factor determinante de esa desorientación.

Una mirada superficial podría indicar que vivimos en una sociedad muy politizada. El centimetrage de declaraciones políticas en los medios impresos o el tiempo de los noticieros y programas de opinión en radio y TV, las conversaciones en los carros por puesto o lugares de trabajo y diversión podrían dar esa impresión. Sin embargo, no se da una auténtica discusión política por la falta de información, la escasa conciencia

pública que permita incorporar la preocupación global por el país en el horizonte de la conciencia individual y la patética ausencia de organizaciones sociales. Entre las muchas cosas que la crisis que atravesamos nos va enseñando podemos contar también esta: necesitamos politizarnos como sociedad, pasar de ser espectadores desde las gradas de una escena política con pocos actores a participantes organizados en los mecanismos de toma de decisiones y actores de programas para poner en práctica el proyecto común que concibamos como resultado de hacernos ciudadanos adultos.

Desde esta perspectiva el ambiente propicio que se va creando para la realización de una Asamblea Constituyente se convierte en un arma de doble filo. El proceso de creación de nuevas bases de legitimidad para el sistema político que culmine en la elección y realización de una Asamblea Nacional Constituyente redactora del marco constitucional en el que se va a desenvolver la acción colectiva de llevar a la práctica el diseño de país surgido de ese proceso, es una ocasión privilegiada para acelerar la deseada democratización de Venezuela, impulsar el surgimiento de nuevos liderazgos, de múltiples organizaciones sociales y de sujetos políticos alternativos.

Por otra parte, la sospecha de que no exista un «cuerpo social» lo suficientemente desarrollado y representativo de una sociedad civil correspondiente a la pluralidad real de la sociedad venezolana actual, convierte la convocatoria a una Asamblea Constituyente en un enorme riesgo. Su realización antes de tiempo puede abortar el proceso constituyente al convertirse en un nuevo escenario para los viejos actores: las élites políticas, económicas, sociales y militares que de esta manera apenas cambian el guión de su forma de ejercer el poder desvinculadas del resto de la sociedad. También puede convertirse en la ocasión para que minorías audaces impongan en forma de principios constitucionales sus convicciones particulares. Por ejemplo, existen en el país beligerantes grupitos predicadores de las ideas llamadas «neoliberales» que preferirían este atajo a tener que confrontarse con el resto de la sociedad no tan convencida de la panacea que ellos presentan.

El proceso constituyente exige un ritmo que permita el fortalecimiento de la sociedad civil, es decir, de la toma de conciencia pública de toda la población y del surgimiento de la variada red de organizaciones que representen su pluralidad, luego de la negociación social a través de la cual surja un proyecto compartido de sociedad que articule los diferentes intereses en ella existentes y permita la aprobación de un marco constitucional dentro del cual converjan los esfuerzos por la realización del proyecto. Es importante, por consiguiente, sincronizar los tiempos, concentrar los esfuerzos en crear las condiciones para que la convocatoria a una Asamblea Constituyente sea un paso cualitativo hacia una democracia eficiente, sustentada en la justicia social y un crecimiento económico con equidad. Sin un sujeto social nuevo, sin un pueblo organizado, una Constitución por inspirada que sea no es más que de

papel.

SOBREVIVENCIA O EMERGENCIA

La situación política venezolana se ubica entre estos dos polos: las élites tradicionales que luchan por sobrevivir y la aparición de sujetos emergentes. Las élites partidistas, económicas y militares, cuya alianza logró estabilizar la democracia populista de partidos, han perdido credibilidad pero no han renunciado a continuar ejerciendo el poder político. En diferentes sectores de la sociedad han venido surgiendo sujetos sociales que evolucionan hacia convertirse en sujetos políticos alternativos.

Ambos polos impulsan la transformación del sistema político. Por tanto, la tensión política no es entre «conservadores» y «transformadores» sino por la conducción de una transformación aceptada como inevitable o necesaria. Las élites tradicionales impulsan reformas que les permitan recobrar la legitimidad cediendo el menor terreno posible en la nueva distribución del poder político del sistema reformado.

Las élites militares luchan por detener la fragmentación interna de la Fuerzas Armadas. Han tenido más éxito hacia afuera que hacia dentro. La cúpula militar que sale a retiro en este mes ha sido percibida en bastantes sectores sociales como la pacificadora de las Fuerzas Armadas. Aunque no pudieron evitar el segundo levantamiento el 27 de noviembre de 1992, logran desactivar las conspiraciones internas, especialmente en el seno del Ejército, usando, además de los servicios de inteligencia, la rotación en los cargos y la presión de los ascensos. Sin embargo, el haber utilizado como instrumento fundamental de control la instauración de un modelo de disciplina militar superado en las Fuerzas Armadas venezolanas -calificada de «prusiana» por algunos analistas- no hizo sino acentuar el descontento en los oficiales de menor rango y ahondar la brecha entre Coroneles-Generales y el resto de los oficiales. Antes de la suspensión de Carlos Andrés Pérez y del fracaso del «Serranazo» en Guatemala se le adjudicaron a la



En las próximas semanas veremos hacia donde se orienta el actual gobierno. Si se limita a mantener la estabilidad política necesaria para llegar a las elecciones de diciembre y al cambio de guardia de febrero, «dándole una patada al mingo» de las decisiones de fondo para que sea el próximo Presidente el que intente el arrime; o si asume el carácter de gobierno de transición adelantando lo más posible el proceso de acuerdos sociales, rescate la legitimidad de la democracia y el papel dirigente de la Presidencia de la República

cúpula militar ciertas tentaciones de asumir el poder político aceptando salidas tipo «Fujimori». De esa manera podían aprovechar el desprestigio de la élite partidista para encubrir su propia participación en la corrupción. El desarrollo de los acontecimientos fue en otra dirección y el Comandante de la Aviación, General Eutimio Fuguett B., junto con el General Jesús Gutiérrez resultaron señalados en una investigación administrativa primero, se les impuso una multa millonaria y después un tribunal militar les dictó auto de detención por malversación de fondos, lo que significó la destitución de sus cargos.

La situación militar ha dado también otros signos de inestabilidad. Las acusaciones de manipulaciones en las listas de ascensos fueron esta vez más hacia dentro de las propias FAN que hacia las clásicas interferencias partidistas. Se acusa a la cúpula de haber excluido completamente a los ligados a los alzamientos aunque hayan sido exculpados por los tribunales, de preferir a sus adeptos y de no respetar estrictamente la meritocracia. Más graves han sido los señalamientos del Coronel Hidalgo sobre vinculaciones con el narcotráfico de algunos de los altos oficiales ascendidos. Los oficiales detenidos por los golpes del 4 de febrero y del 27 de noviembre han mantenido una importante presencia pública torpemente manejada por los altos mandos que han recurrido a medidas de censura a los comunicadores, como las dos veces que han impedido la trasmisión del «José Vicente hoy» porque tenía entrevistas del Comandante Hugo Chávez. Los del 27 de noviembre lograron una victoria jurídica frente a la cúpula militar y el gobierno al obtener de la Corte Suprema de Justicia la nulidad del Juicio Extraordinario que les hicieron por el cual habían condenado sumariamente a un grupo de oficiales a más de veinte años de presidio. Más aún, uno de los oficiales detenidos por el 27 de noviembre se convirtió en acusador del General Fuguett Borregales. Las pruebas aportadas terminaron con su destitución y detención. En fin, el recién nombrado Alto Mando Militar (ver Vida Nacional) ha recibido una «olla de presión» con la nada fácil tarea de intentar evitar la fragmentación de las Fuerzas Armadas. No se vislumbra, sin embargo, la intención de enfrentar el fondo de la cuestión militar y proponer una reforma que restañe las heridas desde la base, recogiendo las aspiraciones de adecuar las concepciones, leyes, reglamentos y procedimientos militares venezolanos a los nuevos tiempos políticos. Mientras no se tome en serio la profesionalización de la institución y se encuentren canales de participación en la vida nacional propios de una sociedad que avanza en su democratización no es posible pensar en una auténtica unidad de las FAN. También dentro del mundo militar es necesari-

Es importante sincronizar los tiempos, concentrar los esfuerzos en crear las condiciones para que la convocatoria a una Asamblea Constituyente sea un paso cualitativo hacia una democracia eficiente, sustentada en la justicia social y un crecimiento económico con equidad. Sin un sujeto social nuevo, sin un pueblo organizado, una Constitución por inspirada que sea no es más que de papel.

rio reconocer y darle su lugar a la novedad emergente.

La élite económica no avanza más allá de una letosa repetición de la letanía: «no se puede volver atrás» el Programa de Ajustes Económico (a) «el Paquete». No se sale de la discusión del falso dilema «paquete» o «retroceso al intervencionismo». No hay declaración de algún representante del sector privado que no manifieste el temor de que el gobierno de Ramón J. Velásquez eche marcha atrás. ¿Acaso es posible, aunque quisiera, volver a controlar precios, subsidiar como en tiempos anteriores, aumentar el gasto público, decretar alzas de salarios... para un Estado cuyo déficit fiscal se acerca a la tercera parte de su Presupuesto?

Lo que manifiestan con este discurso es una enorme debilidad ideológica y política, además de la incapacidad de encontrar un eje de organización del sector privado coherente con ese mismo discurso, que deje de lado alguna forma de enfrentamiento con el Estado para darle la cara a los verdaderos problemas del sector económico privado como son el crecimiento de la competencia leal, abandonar los esquemas de mejor o peor disimulada tendencia a prácticas monopólicas y a exigir protección especial cuando no logran niveles de productividad que les permita competir con las importaciones. La apertura de los mercados y el estímulo a la competencia en la producción y el comercio se ha encontrado con fuertes resistencias de los propios agentes económicos privados. La impreparación para competir, la baja rentabilidad en todos los ámbitos de la actividad económica ha traído como consecuencia que se afirme ideológicamente el acuerdo con un sistema de libre mercado, pero para los demás sectores, es decir, que se siga protegiendo al de cada uno de los que defiende en abstracto la necesidad de la apertura económica.

Los sectores emergentes intentan plantear la discusión en otro terreno. La ausencia de un horizonte socialmente compartido sobre el modelo económico capaz de equilibrar el crecimiento sostenido con la justicia social impide un debate realmente fructífero. Igualmente, intentan orientar el debate hacia las medidas que pueden y deben tomarse en el corto plazo para crear las condiciones para un desarrollo integral de la economía a mediano y largo plazo de acuerdo con ese horizonte que incorpora la equidad social como un objetivo y una dimensión permanente del quehacer económico.

La situación política venezolana se ubica entre estos dos polos: las élites tradicionales que luchan por sobrevivir y la aparición de sujetos emergentes.

Las élites partidistas tradicionales continúan enfrascadas en modos de proceder derivados de la concepción de organizaciones de disciplina vertical. Los episodios de la destitución de Humberto Celli de la Presidencia de Acción Democrática por declarar públicamente su divergencia con la posición de otros miembros de la dirección partidista, y la exclusión de Ra-

fael Caldera y otros dirigentes de las filas de COPEI, muestran hasta que punto se pretende mantener una concepción disciplinar arcaica de los partidos. Esa mentalidad se refleja también en la forma como se aborda la reforma del Ley de Sufragio o la composición de las listas de candidatos a los cuerpos deliberantes, y en general frente a los esfuerzos que se hacen en el país por flexibilizar los mecanismos de participación política.

EL NUEVO PAIS

Otro eje de tensión política en la actualidad es la que se produce entre el centro y la periferia del país o entre la capital y el interior de la República. No es fácil encontrar el vocabulario preciso para referirse a una realidad nueva. La Venezuela moderna se hizo posible en base a la unificación del territorio, la centralización del Estado y su administración y la concentración del poder político. Dos organizaciones de estructura muy centralizada: el Ejército y los partidos políticos fueron las más notorias sustentadoras de una modernización en la que la concentración estatal de la principal fuente de recursos -la renta petrolera- marcó el carácter del proceso. El lenguaje común ha expresado esta realidad como la contradicción entre Caracas y el resto del país, entre «la capital» y el «interior».

Una dimensión sustantiva de lo que sucede a nivel político en la actual coyuntura venezolana tiene que ver con la aparición del «interior» como interlocutor político. La presión por la descentralización va mucho más allá de una desconcentración administrativa del Estado o la reorganización de las dependencias administrativas o de la prestación más eficiente de los servicios públicos. Se trata de una presión por la redistribución del poder político, por democratizar hacia dentro, hacia «el interior», los mecanismos de toma de decisión. Desde el centro se ha querido interpretar esta presión como una vuelta al «federalismo desintegrador de la unidad nacional» que impidió la consolidación de la República en el siglo XIX. Esta es una visión miope y anacrónica. Lo sucedido en el siglo XX en todos los órdenes de la vida nacional ha sido un cambio cualitativo en relación al pasado decimonónico. La vuelta atrás es simplemente imposible. Esa comparación sólo puede ser producto de las resistencias a una transformación que afecta en la correlación de fuerzas políticas a quienes ejercen más plenamente el «poder capital». La descentralización entendida como la incorporación del «interior», es decir, como la desaparición de la relación «capital-provincia», supone un nivel superior de integración nacional, exige la aparición de nuevos actores políticos, mejores canales de comunicación social y formas de negociación democrática más desarrolladas. La puesta en marcha de este pro-

La ausencia de un horizonte socialmente compartido sobre el modelo económico capaz de equilibrar el crecimiento sostenido con la justicia social impide un debate realmente fructífero.

ceso supone revolucionar hasta la raíz de la cultura política en la que nos hemos movido y es la auténtica vía para la superación de la tendencia cogollística que se apoderó de la dirección política y social de los comienzos de la democracia en Venezuela.

Un signo claro de este proceso es el papel que han comenzado a tener los Gobernadores de Estado, directamente elegidos por sus pobladores, en la escena política nacional. Saltando sus identidades institucionales como agentes regionales del poder central y sus fidelidades partidistas los Gobernadores de origen adeco, copeyano, masista, mepista o causaerrista han venido actuando como un «grupo de presión» autónomo tanto en lo político como en la formación de opinión pública. Se sienten con la legitimidad de la que carece el Gobierno Nacional, la Administración Central y el Congreso de la República y, por consiguiente, capaces de dialogar con la población, expresar sus aspiraciones y representarlas en diversos niveles de la vida pública. Los Gobernadores se han venido reuniendo para proponerle al Ejecutivo Nacional y al país ideas sobre la marcha del conjunto de la sociedad. Hicieron pronunciamientos antes de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, reivindicaron su derecho a ser consultados en la nominación del Presidente de la República...etc. Más aún, se les ha venido reconociendo ese papel tanto por la opinión pública como por las direcciones de los grandes partidos, al punto que Pedro París Montesinos e Hilarión Cardozo, Presidente de AD y COPEI respectivamente, les ofrecieron oficialmente disculpas por no haberlos incluido formalmente en las consultas sobre para la elección del Presidente por el Congreso Nacional.

El Presidente Ramón J. Velásquez parece intuir la importancia de este proceso. Además de su procedencia del «interior» y de no haber perdido nunca su relación con las diversas regiones del país, en cuanto regiones, ha demostrado concederle una importancia de primer orden al iniciar la conformación de su equipo de gobierno con el nombramiento de un Ministro de Estado para la Descentralización y haber escogido la persona de Allan R. Brewer-Carías cuya larga trayectoria en la materia y sus opiniones recientes permiten pensar que se pretende impulsar la descentralización del poder y no sólo de las instituciones públicas.

No bastan, sin embargo estos signos alentadores. Se necesita el surgimiento y consolidación de los sujetos sociales «del interior». No hay duda de la existencia de personas y organizaciones capaces en todo el país, y de la capacidad de aprendizaje. Hace falta que esas personas y organizaciones asuman el conjunto de la sociedad venezolana desde su región y se sientan sujetos políticos de un proyecto nacional en el que las regiones son adultas, soporte de la actividad productiva, distributiva y de toma de decisiones.

Un signo claro de este proceso es el papel que han comenzado a tener los Gobernadores de Estado, directamente elegidos por sus pobladores, en la escena política nacional.

EL CAMINO HACIA LAS ELECCIONES

Las cuatro candidaturas presidenciales más importantes reflejan esta tensión «capital-interior». Rafael Caldera y Claudio Fermín proceden de la tradición central, es decir, de «la capital». Caldera es su versión honesta, con experiencia de gobierno en el esquema centralizado propio del sistema político surgido de la modernización rentista. Claudio es la generación joven que presenta una imagen renovada del liderazgo «capitalino», resultado de una vida política dentro de las estructuras «nacionales» del partido modelo de las organizaciones políticas centralizadas gestoras de la moderna sociedad venezolana. Sus planteamientos programáticos hasta ahora conocidos se ubican en ese horizonte nacional, y su experiencia de gobierno precisamente en Caracas.

En cambio, Oswaldo Alvarez Paz y Andrés Velásquez vienen del electoralmente exitoso ejercicio del gobierno regional. Ambos mejoraron su resultado electoral después de tres años de gestión, aunque una y otra sean difícilmente comparables «en términos reales», lo cual permite intuir que representan más un «sentimiento» político que una forma de administrar los recursos. Oswaldo Alvarez Paz renunció a la pelea por liderazgo capitalino, en donde se había formado como político pero estaba acorralado y sin perspectiva por la dinámica propia de las «maquinarias» centralizadas y construyó una imagen de liderazgo desde el interior. Su campaña para la candidatura nacional copeyana se basó, incluso financieramente en fuerzas del interior, después completada por apoyos centrales, pero también vista con recelo por algunos sectores de la capital (financieros y políticos) cuyos intereses van más hacia cruzar las fronteras nacionales que hacia la integración de la provincia venezolana.

Andrés Velásquez tiene una trayectoria política que viene de la periferia hacia el centro en todos los sentidos: en su ideología, estilo de trabajo y de organización, experiencia política y de gobierno. En efecto, la matriz de Andrés Velásquez como líder se ubica en su acción sindical en una empresa básica del Estado, emblema del éxito de la modernización rentista-centralizada. El liderazgo obrero se complementó con el popular en los sectores barriales, productos masivos y reales, no previstos del proceso impulsado desde el centro. En lo ideológico, el proceso iniciado por Alfredo Maneiro significó también independizarse de los «centros» de producción intelectual de la izquierda para buscar raíces propias en el pueblo venezolano. La práctica organizativa y de alianzas se ha salido también de los esquemas tradicionales. Su obra de gobierno en el Estado Bolívar ha comenzado el rescate de la administración pública como servicio honesto al ciudadano e interés especial por los sectores empobrecidos.

Su imagen ha logrado ubicarse bien en los sondeos de

opinión, aunque necesita crecer en el occidente del país. Puede obtener una votación que oscila entre el 15 y el 20 por ciento, pues representa simultáneamente el polo opuesto al estamento político actual y la corriente de provincia que irrumpe en la vida nacional. Dos obstáculos han aparecido en el camino: los problemas políticos de la Alcaldía de Caracas, que impiden profundizar su acción propia y la aprobación en el Parlamento de un

artículo de la Ley del Sufragio que obligaría a Andrés Velásquez a renunciar a la Gobernación del Estado Bolívar para poder inscribir su candidatura presidencial. Detrás de ambas jugadas está Acción Democrática. Jugar al fracaso de Aristóbulo Istúriz en Caracas entra plenamente dentro de sus intereses electorales y políticos. La obligación de renunciar a la Gobernación para poder ser candidato pone a Andrés Velásquez en un dilema de difícil solución. Como no es probable que gane las elecciones, su caso

no es cambiar la Gobernación de un Estado por la Presidencia de la República. Renunciar a la Gobernación lo separaría de su mayor base de poder político. Sólo se justificaría si existe un proyecto bien diseñado de trabajo político nacional, lo cual implicaría profundas transformaciones en la organización, concepciones y estilo de la Causa R.

En el otro extremo, Rafael Caldera lucha por convertirse en la candidatura de la oposición. Un eventual retiro de la candidatura de Andrés Velásquez lo convertiría en el receptor de un buen caudal de votos que hoy prefieren a la Causa R. Su plataforma ideológica está llena de ambigüedades. Por una parte, se presenta como la auténtica candidatura socialcristiana contrapuesta a un COPEI que se ha pasado al bando de los «neo-liberales». Por

otra, pretende presentarse como una figura extra-partido y extra-cogollo, habiendo sido fundador no sólo de la segunda organización política más importante del sistema de partidos y usufructuario por décadas de su estructura, sino que se abstuvo de participar en la consulta electoral interna más amplia que organización alguna haya realizado en Venezuela, en la cual obtuvo su nominación Oswaldo Alvarez Paz derrotando a quien Caldera denunciaba como «cogollo» manipulador e irrecuperable. Y, por otra, se compara con Patricio Aylwin, Presidente socialcristiano chileno, en cuanto

La ausencia de un liderazgo cultural, intelectual, económico y político con suficiente credibilidad para motivar y canalizar el proceso de generación de consensos sociales básicos, es otro factor determinante de la desorientación del pueblo.

Las cuatro candidaturas presidenciales más importantes reflejan esta tensión «capital-interior». Rafael Caldera y Claudio Fermín proceden de la tradición central, es decir, de «la capital». Oswaldo Alvarez Paz y Andrés Velásquez representan el interior que quiere llegar a Miraflores.

encabezó un frente electoral de diversos partidos, para continuar fundamentalmente la política económica «neo-liberal», impuesta por el régimen militar-dictatorial del General Augusto Pinochet, quien ha permanecido mandando. No resultará fácil armonizar todas estas partes alrededor de un programa común, una campaña coordinada y un acuerdo en la integración de las planchas para los cuerpos deliberantes de los muy diversos grupos que piden cupo en ese «portaviones» (MAS, MEP, Renace, quizá el PCV... que suponen una difícil convergencia)

La posición en las encuestas de Caldera comparte la punta con Oswaldo Alvarez Paz. La salida de Carlos Andrés Pérez de

la Presidencia de la República y los signos del actual gobierno de transición cambian bastante el planteamiento electoral. Caldera podría verse beneficiado de un éxito de Ramón Velásquez en la Presidencia, en cuanto se demostraría que la edad y la «veteranía» lejos de ser un obstáculo es un elemento favorable para gobernar en estos momentos de la historia venezolana. El electorado podría ver en Caldera la «paternidad responsable» necesaria en estos momentos, papel en el que ninguno de los otros candidatos puede competir. Pero, la salida de Carlos Andrés también ha demostrado que situaciones inéditas y muy tensas de la situación política se pueden superar pacíficamente sin la necesidad de recurrir a hombres extraordinarios, cuyo unción mesiánica indique las vías a seguir. La salida de C. A. Pérez obliga a un debate mucho más preciso al inicialmente planteado por Caldera. Ya no se trata de la continuación del «paquete» o su sustitución a ese nivel de imprecisión, sino de discutir sobre proposiciones programáticas y medidas específicas en los distintos campos del quehacer nacional, especialmente el económico y la lucha contra la corrupción. Si el gobierno de transición, además, comienza a producir propuestas, fruto de amplias consultas nacionales y requiere el concurso de los candidatos para tomar decisiones se obligará a Caldera, su equipo y al de los otros candidatos a aterrizar sus posiciones, antes de las elecciones, con lo cual caerán muchos mitos y se hará muy difícil mantener una campaña en base a adjetivos indemostrables.

Oswaldo Alvarez Paz, sigue viviendo del impulso de su avasallante triunfo interno. Sin embargo, todavía no ha tomado posesión de COPEI. Las resistencias en la Dirección Nacional a aceptar la «jefatura» de Alvarez Paz son notorias, por lo cual él se sigue sintiendo más cómodo actuando como Gobernador del Zulia que como candidato presidencial nacional de COPEI. La militancia partidista y la periferia copeyana tampoco está totalmente aglutinada en torno a Oswaldo. Diversas estimaciones indican que hasta una tercera parte de ese universo sigue pensando en votar por Caldera. La decisión de excluir a Caldera y a los dirigentes nacionales que lo han apoyado públicamente en sus pretensiones candidaturas de la filas de COPEI sólo puede entenderse en el esfuerzo por delimitar de una vez los campos. Alvarez Paz ha hecho su parte al enfrentarse con Caldera y la Dirección Nacional la suya recorriendo el país para explicar la lógica de la acción y llamar a la coherencia con el resultado de la exitosa consulta electoral realizada. Sin embargo, las posibilidades reales de triunfar en diciembre son un aliciente importante para aglutinar a la maquinaria copeyana que ya lleva diez años fuera del gobierno, aunque haya que hacer de tripas corazón para apoyar a Oswaldo. Alcanzar el triunfo significa hacer una campaña a tono con el candidato y las condiciones de un país que pide definiciones, para lo cual el trabajo en la parte programática no puede esperar mucho más.

Claudio Fermín luce muy débil en las encuestas y en la realidad. Pocos apuestan a él y muchos lo hacen blanco de sus críticas. Por muchas declaraciones en contrario que él haga, la brecha entre la secretaría general del partido y la maquinaria que le responde al «caudillo» Alfaro Ucero y el equipo de Fermín luce muy grande. Al parecer el partido está seguro de la derrota

electoral y planifican una estrategia en la que pierdan el menor terreno posible en los cuerpos deliberantes. Claudio como candidato resulta bueno para esa estrategia, pero el punto está en la confección de las planchas. Por eso tuvieron que llamarlo al orden en la discusión de la Ley del Sufragio en la que el candidato sostenía aumentar la elección uninominal más allá del 50% y no terminan de aceptarlo como «jefe del partido» a pesar de haber ganado ampliamente las elecciones internas. La dirección de Acción Democrática es la que luce más refractaria a los cambios que se vienen dando en el país e ilusionada en que estamos pasando un temporal. «Llueve y escampa», dijo una vez el líder suspendido.

BARBARIE O CIVILIZACION

No cabe duda de que estamos en una importante transición histórica. Hemos traspasado el «punto de no retorno» en lo que se refiere a una economía rentista, un Estado interventor-paternalista y un sistema populista de conciliación. El «antiguo régimen» se ha venido desmoronando más rápidamente de lo vaticinado y sin esperar la maduración de su sustituto.

El momento que vivimos es por eso angustioso. La desaparición de lo anterior ha traído consecuencias dolorosas: empobrecimiento colectivo, crecimiento de la injusticia, surgimiento de una expansiva violencia social que ha obligado, incluso, a

cambiar los hábitos cotidianos de los habitantes de las zonas urbanas. El proceso social actual puede derivar hacia un crecimiento de la anarquía y de la anomia. La ausencia de proyecto de futuro socialmente compartido, la creciente ineficacia del Estado en la prestación de los servicios básicos, la inexistencia de un

liderazgo convocador, la prédica constante del individualismo y el consumismo en contraste con el deterioro continuado de la calidad de vida de las mayorías invita a la actuación individual, a que cada uno busque obtener sus objetivos propios con sus propios medios, entre los cuales el ejercicio de la violencia se revela como muy eficaz. La barbarie, en forma de anarquía social y comportamiento anómico, se asoma en nuestro horizonte.

Si el desarrollo del proceso se inclina en esa dirección podría sobrevenir un régimen autoritario, de corte «fascista» (véase: Manuel Caballero, «Las posibilidades de un fascismo en Venezuela», SIC, n° 554, mayo 1993), pedido a voces por la población para imponer un orden que revierte la anarquía.

De allí la importancia de impulsar el proceso en la otra dirección: el fortalecimiento de la sociedad civil como sujeto de la vida pública venezolana. Para ello hay dos procesos simultáneos en el interior de cada persona de manera que se convierta en ciudadano porque asume lo público como parte de su vida cotidiana, de sus preocupaciones y objetivos vitales; y la multiplicación de organizaciones civiles que hagan posible el ejercicio del poder político por parte de la ciudadanía.

Hasta ahora apenas vislumbramos una sociedad civil como contradistinta de los partidos y del Estado. Con su fortalecimiento harán su aparición los conflictos propios de la sociedad civil y los mecanismos democráticos para su articulación. Por esa vía caminaremos hacia una democracia efectiva.

No bastan estos signos alentadores. Se necesita el surgimiento y consolidación de los sujetos sociales «del interior».